

PROPUESTA DE LA MESA DEL CONSEJO CENTRAL

Ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional presentado por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT a las filiales, AEBU debe tomar posición concreta sobre el punto.

A tales efectos, es imprescindible tomar en cuenta que la Asamblea General del Gremio, órgano máximo de nuestro sindicato, adoptó Resolución que en su numeral 6) establece: *“Continuar impulsando acciones junto al movimiento sindical, que a partir del diálogo social y convocando a grandes mayorías construyan un sistema de seguridad social humano, justo y solidario. Como ha sido tradición nuestro sindicato seguirá participando del proceso de discusión interna en el PIT-CNT, que se encuentra en la etapa de definición del contenido del proyecto de iniciativa de reforma constitucional relativa a la seguridad social a plebiscitar, decisión que se tomará en la Mesa Representativa Nacional Ampliada convocada para el 6 de setiembre próximo.”*

Con este mandato, analizamos diversos aspectos de la propuesta de reforma presentada:

1. El proyecto presentado se aparta de los acuerdos internos del movimiento sindical expresados en el Congreso del PIT-CNT.

La Resolución del congreso expresa: *“Es necesario no solo eliminar el artículo 8 sino también eliminar las AFAP. Consideramos que el sistema debe tener un pilar de ahorro sobre bases completamente diferentes, que no incluyan ni la intervención de actores privados con lucro, ni el desarrollo de cuentas individuales. Apostamos al desarrollo de un pilar de ahorro colectivo, en el que se administren profesionalmente los ahorros de los trabajadores por parte de una entidad estatal sin fines de lucro.”*

El texto de la iniciativa de reforma sometido a nuestra consideración propone pasar a un régimen de exclusivo reparto, eliminando un sistema de pilares y expropiando los ahorros de las cuentas individuales en favor del BPS. Los acuerdos en materia de seguridad social, alcanzados en el Congreso de Pit-Cnt, se generan a partir de la búsqueda de un amplio consenso interno, lo que no ha sucedido en esta instancia tan importante.

2. La vía propuesta y el contenido de la iniciativa no surgen del dialogo con actores sociales y políticos que construyan un amplio consenso para vehiculizar una reforma constitucional. Esta condición, conlleva una pérdida de acumulación y genera aislamiento del movimiento sindical, contradictoria con la orientación fundamental definida y que hoy intenta avanzar en el marco de la realización del Congreso del Pueblo.

3. En la lucha contra la reforma de la seguridad social, plasmada en la ley 20130, se centraron en proponer que Otra Reforma es Posible. Una reforma que atendiera los desafíos de la seguridad social, sobre la base de nuevas fuentes de financiación, que se proyectara frente a los cambios del mundo del trabajo y las nuevas formas de contratación. Esta propuesta de reforma constitucional no afronta ninguno de estos desafíos, y contiene contradicciones importantes con su logro.

4. Incorporar a la Constitución de la República contenidos concretos de una reforma de la seguridad social –aspecto discutible técnica y políticamente- se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado, la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación o la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social, los efectos sobre los

trabajadores y jubilados, los niveles de injusticias que genera, ni cómo podría generar deterioro de otros aspectos de la realidad económica y laboral. El movimiento sindical y sus organizaciones debemos ser fieles a nuestra tradición de responsabilidad y solvencia al momento de presentar a los uruguayos nuestras propuestas.

5. El proyecto presentado de reforma, incluye una serie de incertidumbres, impactos sobre derechos fundamentales, disuelve organizaciones privadas, incorpora limitaciones a la protección social de algunos sectores, genera beneficios no apegados a principios de justicia, incrementa el déficit del sistema y la caja policial y militar, y podría generar juicios contra el Estado de cuantía incalculable.

6. Las condiciones que promueve, ponen en manos de futuros gobiernos estímulos importantes para deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores, imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados y justificará nuevas cargas impositivas regresivas.

7. Un aspecto importante para AEBU, es la situación de incertidumbre que genera esta definición del PIT-CNT en el colectivo de trabajadores afiliados de las AFAP, así como el efecto sobre alguna empresa financiera del sistema.

A partir de estos elementos, y de las consideraciones particulares sobre el proyecto de reforma el Consejo Central de AEBU resuelve:

- **Trasladar al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT estas consideraciones, y el análisis de la ley que se presenta a continuación.**
- **Solicitar que la misma sea remitida al resto de las organizaciones integrantes de la Mesa Representativa Ampliada, como insumo a la discusión.**
- **Establecer las presentes consideraciones como argumento suficiente para votar negativamente el impulso de la recolección de firmas.**
- **Comunicar a todos nuestros afiliados la presente argumentación y decisión.**

Análisis del proyecto de reforma constitucional remitido a los sindicatos para su consideración.

De los análisis iniciales del texto, surgen algunas consideraciones e incertidumbres que requerirían ser analizadas, consideradas y respondidas.

- **Impactos sobre derechos fundamentales.**

1. Restringe las posibilidades de la sociedad civil y las organizaciones de trabajadores de generar sistemas de ahorro voluntario previsional.

2. La prohibición de los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, alcanzaría a toda modalidad, obligatoria o voluntaria. Esto comprendería no sólo a los fondos administrados por las AFAP sino también a los fondos complementarios previstos en el Decreto-Ley 15.611 y otras modalidades contractuales o voluntarias.

3. Consagra la pensión a la vejez como instrumento asistencial, condicionado a la demostración de la carencia de recursos, manteniendo su carácter discriminatorio hacia los inmigrantes.

4. Implica confiscaciones retroactivas, sin establecer mecanismos compensatorios.

- **Incorpora limitaciones a la protección social de algunos sectores**

5. La definición de 30 años de servicio, estaría habilitando la eliminación de las causales que permiten jubilaciones con menos años de aportación, con la consecuente pérdida de cobertura, y un sesgo previsible negativo hacia los trabajadores más vulnerables, que no logran reunir 30 años de servicios reconocidos. Dejar abierta la posibilidad de que futuras leyes propongan “sistemas de cómputos especiales” además de poco claro como concepto, es supeditar el acceso jubilatorio a la voluntad política del gobierno.

6. La aplicación de estas definiciones, conllevaría una adecuación del déficit del sistema, a partir de generar en estímulos muy fuertes a postergar la jubilación, conllevando efectos negativos en la relación entre la contribución al sistema y la prestación.

- **Afecta la equidad y justicia en diversas prestaciones.**

7. Las pensiones con un mínimo de un Salario Mínimo Nacional, implican un incremento sustancial, pero rompe con la relación entre jubilación y pensión, aplicándose más allá de la realidad de ingresos del beneficiario. Se mejorará los niveles para sectores que realizan evasión al sistema o utilizan los mecanismos de aportes mínimos.

8. Al expresar que “el Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al Sistema de Seguridad Social, concediendo prestaciones inferiores a las que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el Título VI de la Ley 16713 del 3 de setiembre de 1995” se generan situaciones complejas e injustas. El capítulo VI no incluye los máximos jubilatorios que serán variable de ajuste. El cálculo del Salario Básico Jubilatorio se actualiza solo hasta el monto donde comienza el aporte al régimen de ahorro individual, por lo cual lo que supere dicho monto no tendría actualización.

9. Los aportes personales correspondientes a las asignaciones computables del tercer nivel generan una deuda, no asumida voluntariamente por los trabajadores alcanzados, por los aportes personales no realizados desde 1996 para miles de afiliados, incluyendo algunos ya jubilados. Estos aportes, difícilmente generarían contraprestación equivalente, por lo que sería una distorsión sobre sus derechos, y un impacto gravoso de corto plazo en su situación económica.

- **Incrementa el déficit de todo el sistema.**

10. La aplicación del SMN en materia de pensiones implica un importante incremento del déficit, y muy particularmente en las llamadas cajas militar y policial.

11. El costo de reconstruir todas las jubilaciones que incluyeran componente de sistema mixto en forma retroactiva, implicará un incremento de los egresos, que no es compensado por los recursos expropiados a las AFAPs.

- **Eventuales juicios contra el Estado de cuantía incalculable.**

12. La totalidad de los fondos acumulados en el pilar de ahorro individual se trasladan a un fideicomiso cuyo beneficiario es el BPS. Está implícita la confiscación de los ahorros, que pertenecen a los afiliados al BPS comprendidos en el régimen mixto y que son titulares de las cuentas individuales.

13. En cuanto afectación del derecho de propiedad, debería existir una indemnización justa y previa a los afiliados según lo establece el art. 32 de la Constitución. En efecto, ninguna disposición propuesta deroga a estos efectos dicha norma constitucional.

14. Por otra parte, el derecho de propiedad está reconocido y protegido por normas internacionales ratificadas por la República. El Estado uruguayo no podría exonerarse de responsabilidad invocando el derecho nacional, aunque éste fuere de jerarquía constitucional.

15. Si bien en muchos casos podría considerarse que la justa indemnización está dada por la aplicación de un régimen más favorable para el cálculo de la prestación, previsiblemente no será así en todos los casos: probablemente exista un número relativamente importante de afiliados de altos ingresos comprendidos en el régimen mixto a quienes éste les resulte más favorable.

16. Por otra parte, los fondos previsionales de las cuentas de ahorro individual pueden transmitirse por sucesión, y los herederos no necesariamente son beneficiarios de una pensión de sobrevivencia que compense la pérdida del activo sucesorio.

17. Las AFAP de origen transnacional, podrán realizar juicios de indemnización y lucro cesante fuera del país, con indemnización que puede incluir todo el monto de comisiones previstos de cobrar por sus afiliados hasta que generen el retiro.

- **Gobiernos con visiones regresivas podrán definir:**

18. La vinculación de jubilaciones y pensiones al SMN estimulará usar el salario mínimo como variable de ajuste del gasto en seguridad social, deteriorando las condiciones salariales de los trabajadores

19. Imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados Una orientación de gobierno restrictiva, podría establecer una jubilación menor con 60 años, y 30 de servicio y obligar a muchos años de trabajo más para mejorar la prestación. Las referencias de cálculo jubilatorio a la ley 16713, no incluye los máximos jubilatorios, que podrán ser usados como mecanismo de ajuste.

20. Justificará nuevas cargas impositivas regresivas. La reforma implicará incremento sustancial del gasto en seguridad social en forma inmediata, así como del déficit de otros organismos. Estas medidas, con efecto retroactivo sin transición y no cuantificadas pueden significar impactos muy relevantes.

21. Trasladar en carga impositiva el resultado de todos los posibles juicios que tenga el Estado tanto por la expropiación de los ahorros individuales, como el lucro cesante que puede ser sometido a juicio fuera de la jurisdicción nacional.

- **A estos problemas se le agregan una serie de incertidumbres**

22. La seguridad social es un derecho “no susceptible de lucro”. Para el beneficiario de las prestaciones de la seguridad social, debería existir un lucro, que asegure un incremento del capital aportado, por lo cual la expresión no es apropiada ni correcta como enunciado general.

23. En cuanto a la prohibición de los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio: ¿Alcanzaría también a toda modalidad, obligatoria o voluntaria, como ser los fondos administrados por el FOCER creado por Ley 18.236 y por los fondos complementarios previstos en el Decreto-Ley 15.611? Asimismo, ¿comprendería los mecanismos contractuales voluntarios, como los seguros de ahorro y retiro previstos por el BSE y otras empresas aseguradoras? ¿podría afectar cuentas personales como las de Fonasa?

24. Si las “contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por la ley” no podrán ser afectados a fines ajenos a los pagos de prestaciones; ¿Los costos de funcionamiento del BPS deberían ser cubierto con asistencia del estado?

25. ¿Qué valor del salario mínimo se va a tomar en cuenta: nominal o líquido? En este sentido, ¿Se tiene costo estimado de llevar todas las pensiones sobrevivencia, y las llamadas no contributivas (vejez, invalidez, víctimas de delitos violentos, etc.) de sus actuales montos a valores de salario mínimo?; ¿Cómo se va a financiar este aumento?

26. ¿Se habla de igualar cada jubilación o pensión, considerando cada prestación de manera individual? ¿O se habla de igualar el monto que se cobra por concepto de pasividad? Esto tiene implicancias bien distintas a nivel del costo económico de la medida.

27. Cuando se expresa, que “las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio” (...) “se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, administrado por el Banco de Previsión Social, con carácter retroactivo a la fecha de afiliación”, no es claro en tanto las personas que son alcanzadas por el régimen mixto necesariamente integran ambos pilares. Probablemente se haya querido decir que a los efectos jubilatorios y pensionarios se computarán la totalidad de sus asignaciones computables, tanto las comprendidas en el régimen de ahorro individual obligatorio como las comprendidas en el régimen solidario, pero no es lo que surge del tenor de la disposición propuesta.

28. A partir del próximo 1/12/23 serán contribuyentes a las AFAPs trabajadores no afiliados al BPS. ¿Igualmente sería el BPS el destinatario de sus fondos?

29. La retroactividad en materia de cálculo jubilatorio para quienes ya están jubilados por sistema mixto, requerirá recuperar los recursos volcados al segundo pilar. Sin embargo, dichos recursos sustentan los seguros de renta vitalicia previsional del BSE. ¿Se piensa eliminar dichas pólizas de seguro?

30. La liquidación de las AFAPs, debe ser realizada por el Banco Central, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 137 y 138 de la Ley 16.713. Al respecto, debe tenerse presente que el art. 137 no prevé como causa de liquidación la cesación de actividades por modificación del marco normativo, por lo que se generaría un vacío legal.

CONSEJO CENTRAL

AEBU PIT-CNT